

Propuestas para la reactivación económica de las comarcas mineras

Julio de 2024

INTRODUCCIÓN

Las comarcas mineras asturianas son el paradigma de la crisis. En estos territorios confluyen crisis industrial y económica, y el resultado se expresa en desempleo, pérdida de población y envejecimiento.

La combinación de estos tres elementos es explosiva por necesidad para cualquier territorio: lastra sus opciones de futuro y constituye una pesada carga para afrontar el futuro, mucho más si se hablamos de un territorio local en un contexto de acumulación de crisis global, de las dimensiones tan colosales como la crisis financiera, la epidemia del coronavirus, o la inflación disparada por la elevación de los costes energéticos de los últimos años y, todo ello provoca que la decepción y la frustración calen hasta los huesos en sus habitantes.

Estos municipios, en los que viven más de 160.000 asturianas y asturianos, tienen las tasas de actividad por los suelos y las de paro por las nubes. El cierre de la siderurgia, primero, y de la minería, después, no fue acompañado de políticas de reindustrialización y diversificación económica eficaces.

Hubo, es cierto, avances y se lograron impulsar proyectos empresariales y sobre todo equipamientos públicos y de infraestructuras, que hoy, décadas más tarde, siguen funcionando, generando empleo y actividad; pero la recuperación económica sigue siendo una asignatura pendiente en las cuencas mineras, que siguen buscando “su sitio” en la Asturias del siglo XXI.

El proceso de destrucción de empleo que han sufrido en los últimos años ha sido brutal. Basta señalar que en las cuencas se destruyó, en los últimos 23 años, hasta el 60% del empleo existente y, si lo limitamos al sector industrial, por ejemplo, solo en una de las comarcas se perdieron siete de cada diez puestos de trabajo. Son datos dramáticos. La destrucción de empleo ha tenido como pareja de hecho el progresivo envejecimiento. Un fenómeno que protagoniza toda Asturias pero que es especialmente intenso en estos municipios, superando la media regional y duplicando las tasas de envejecimiento que tenían hace tan solo dos décadas.

No es casual que la primera y tercera ciudades más envejecidas de España sean municipios de cabecera de las cuencas. Gracias al empuje de las organizaciones sindicales, los acuerdos alcanzados han logrado garantizar ingresos que han permitido sostener económica y socialmente estos territorios en los últimos años, pero insisto: las consecutivas crisis, especialmente la provocada por el colapso del sistema financiero, y la respuesta austericida que se dio por la derecha política, ha provocado un importante crecimiento de la pobreza y la exclusión social.

Las comarcas mineras asturianas esperan, desde hace demasiado tiempo, medidas eficaces para solucionar sus problemas. Han sufrido ingesta de análisis y promesas, pero padecen anemia de propuestas y soluciones.

Una situación que se ha agravado en estos últimos años porque, paradójicamente, en el periodo más reciente las comarcas mineras asturianas han sido las menos beneficiadas por la inyección de recursos provenientes de los fondos mineros. Dos ejemplos: los concejos mineros asturianos obtuvieron apenas el 7% de las ayudas en el año 2017; y mientras el Plan del Carbón 2013-2018 preveía un uso térmico en la generación de energía del 7,5% anual para el carbón autóctono, en 2017 no pasó del 2,4%.

Hace casi dos años, en octubre de 2018, en un contexto de descarbonización acelerada por el Gobierno de Pedro Sánchez, se firmó el “Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el Periodo 2019-2027”, cuyo objetivo último era la reactivación y desarrollo alternativo de las comarcas mineras.

El acuerdo contempla un plan para la restauración de explotaciones y un plan de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética. Y habla de emplear preferentemente a los trabajadores excedentes en los planes de restauración, energías renovables y eficiencia energética que se desarrollen.

Vamos a luchar porque así sea, como hemos hecho siempre, con el diálogo y desde la movilización, porque ya estamos cansados de planes fallidos y promesas incumplidas. Y de padecer sus desastrosos efectos.

Para ello el paso previo es aprender de los errores para no repetirlos. Los análisis elaborados por nuestro sindicato, sostiene que las razones de la fallida reactivación fueron múltiples y complejas: falta de previsión y planificación, clientelismo, incumplimientos de las Administraciones... y, la puntilla: la crisis de 2008, que desbarató algunas iniciativas que tenían visos de poder renovar el deteriorado tejido industrial de las cuencas.

Ahora afrontamos el reto de la transición energética, y desde CCOO venimos advirtiendo de que pocos territorios están siendo tan afectados como Asturias, porque tiene implicaciones en el sector industrial, el transporte, la logística, el

ámbito residencial y, por supuesto, sobre la generación de electricidad. Un proceso que no debe dejar a nadie en el camino porque para que esta transición energética sea justa y equitativa hay que evaluar adecuadamente no solo las consecuencias tecnológicas y ambientales, sino también las económicas y sociales.

Hay motivos fundados para la preocupación: basta recordar el decepcionante estatuto para las empresas electrointensivas que no garantiza precios de la luz estables, predecibles y competitivos, que nuestra industria necesita para ser pujante en el marco europeo. Así mismo todo el proceso de transición energética no puede depender de la decisión de consejos de administración de empresas privadas, los más importantes localizados lejos de España, lo que obliga a un mayor compromiso político de las administraciones para planificar el desarrollo económico del país en base a criterios supeditados al interés general y no al interés de unos pocos.

Exigiremos que acometan planes de inversión, no solo para la restauración y acondicionamiento de las instalaciones cerradas, sino también para el desarrollo de actividades energéticas o industriales y, particularmente, para la instalación de nueva potencia renovable (biomasa, eólica...) y el almacenamiento de energía.

Tenemos que sacar el máximo partido a las posibilidades de ese acuerdo marco 2019-2027, que garantiza medidas de apoyo a los trabajadores mineros, ayudas a los municipios y financiación, y del nuevo plan de empresa de Hunosa, que debe de incluir proyectos industriales y de diversificación enfocados hacia las energías renovables, además de un compromiso de recuperación de los espacios clausurados.

Así mismo, el acuerdo por una Transición Energética Justa para las centrales térmicas en cierre lo suscribimos en abril de 2020, tiene como objetivo principal el mantenimiento del empleo en los territorios y su dinamización económica e industrial. El acuerdo implica la recolocación de trabajadores y la búsqueda de actividades alternativas para las zonas afectadas, tanto por parte de las empresas -mediante proyectos de energías renovables y otras actividades- como por parte del gobierno -mediante el despliegue de instrumentos de ayuda organizados entorno a los Convenios de Transición Justa- y contando con la participación de los sindicatos para facilitar y dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos.

Pero lo cierto es que estos cierres han afectado a miles de empleos en nuestra comunidad, entre directos, indirectos e inducidos, con efectos muy perjudiciales para el conjunto de Asturias. Esas empresas eléctricas, que han obtenido durante décadas extraordinarios beneficios, no pueden olvidar que tienen una gran responsabilidad tanto con los trabajadores como con los territorios en los

que se asienta su actividad. Están en deuda y de momento no cuentan con proyectos importantes que desarrollar en las comarcas mineras.

La coordinación entre administraciones va a ser esencial para complementar, armonizar y dotar de eficacia los distintos planes y medidas. Las comunidades autónomas (y también los municipios) tienen importantes competencias y pueden ser actores institucionales relevantes en la activación de medidas para el desarrollo alternativo de los territorios, por su conexión con las universidades, institutos tecnológicos o asociaciones empresariales.

La ausencia en el pasado de una estrategia global para el desarrollo de cada zona o comarca afectada por cierres ha sido un problema, porque derivó en muchos casos en el reparto de ayudas a municipios o empresas de manera dispersa y sin un planteamiento integral en función de las capacidades y de las necesidades de cada zona.

En CCOO tenemos claras las estrategias a seguir: En primer lugar, las propuestas alternativas para cada zona o comarca deberían estar en función de sus propios recursos, de sus infraestructuras y de las características demográficas y formativas de su población.

Hay potencialidad para el desarrollo de instalaciones, la fabricación de equipos y componentes de energías renovables, el almacenamiento o tecnologías para la eficiencia... Hay que ir hacia un tejido económico que suponga empleo estable y de calidad (para lo cual son esenciales medidas de formación y recualificación), con actividades ambientalmente sostenibles. Una de las carencias principales de las anteriores experiencias, y que no puede volver a repetirse, fue la falta de complementariedad de los recursos económicos comprometidos, puesto que, si bien deberían haber sido extraordinarios para estos territorios, en la práctica en muchos casos sustituyeron las inversiones ordinarias. Al no ser complementarios, sino sustitutivos, perdieron en gran medida su potencial.

Para nuestro sindicato, la reactivación pasa por reforzar la estructura industrial existente y la apertura a un nuevo modelo industrial basado en la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la sostenibilidad. Y ahí el sector público no puede renunciar a jugar un papel estratégico, además de facilitar el desarrollo de la iniciativa privada, a través de una estrategia industrial de país. Todo ello puede ser perfectamente complementado con un aprovechamiento turístico de calidad, con comercios/servicios de proximidad y zonas logísticas. Así mismo la llegada del tren de alta velocidad es una oportunidad para que las comarcas mineras centrales de Asturias no queden descolgadas del desarrollo del conjunto de nuestra Comunidad Autónoma.

Nuestras principales propuestas de reactivación, se encuadran en siete ámbitos: restauración ambiental, nuevas aplicaciones del carbón, agroganadería, forestal, sector agroalimentario, energía y turismo. Sin olvidar que el agua será cada vez un recurso más importante.

Podemos estar en condiciones de afrontar un nuevo modelo productivo sustentado sobre una industria avanzada y tecnológica, sostenible. El corazón económico de Asturias tiene que seguir siendo industrial.

Desde el sindicato queremos ser protagonistas de las soluciones. Para ello aportamos lo mejor de nuestra organización, nuestra capacidad de propuesta, y no dudaremos en impulsar y liderar un debate político y social capaz de materializar una estrategia global que permita aprovechar el talento y la cultura industrial de las comarcas mineras para que ocupen el lugar que se merecen en el futuro de nuestra comunidad autónoma. Así lo estamos haciendo en las diferentes mesas de diálogo social, en el diseño de las estrategias de desarrollo de Asturias, especialmente lo hemos hecho con la elaboración de la Estrategia de Transición Justa 2019-2027 y ahora con la puesta en marcha del Observatorio de la Transición Justa que ha de evaluar y, corregir en su caso, las políticas que se empiezan a poner en marcha para desarrollar con éxito este proceso en nuestro territorio.

Asturias se la juega y Comisiones Obreras seguirá empujando por un futuro mejor.